



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-006-2021-0024-01
Demandante:	María de la Luz Villada de Osorio
Demandado:	COLPENSIONES E.I.C.E
Asunto:	Apelación y Consulta sentencia
Procedencia:	Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivientes, dependencia económica padres.

Medellín, mayo tres (03) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO con ausencia justificada y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de COLPENSIONES E.I.C.E, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el 2 de marzo de 2023, en el proceso

ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MARÍA DE LA LUZ VILLADA DE OSORIO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E. Radicado 05001-31-05-006-2021-00024-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora MARÍA DE LA LUZ VILLADA DE OSORIO convocó a juicio a COLPENSIONES E.I.C.E, pretendiendo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por ser beneficiaria y depender económicamente de su hijo, Jhon Jaime Osorio Villada, con el retroactivo pensional, los intereses moratorios y la indexación.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que el señor Jhon Jaime Osorio Villada, hijo de la señora María de la Luz Villada Osorio, nació el 4 de marzo de 1967 y falleció el 3 de marzo de 1997, que era soltero, no tenía hijos y compartía vivienda con su madre, por quien veía económicamente, que tras el fallecimiento del señor Jhon Jaime Osorio Villada, la actora quedó desprotegida, que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el 26 de abril de 2019, prestación que le fue negada mediante Resolución SUB 140035 del 31 de mayo de 2019, bajo el argumento de que no se acreditó la dependencia económica.

1.2.- CONTESTACIÓN

COLPENSIONES E.I.C.E., al replicar la demanda, admitió como cierto la fecha de nacimiento y fallecimiento del señor Jhon Jaime Osorio Villada, la calidad de hijo de la demandante, que la actora solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia y que la misma le fue negada mediante Resolución

SUB 140035 de 2019, señalando que no le constan los demás hechos y que una vez realizada la investigación administrativa, se concluyó que la señora María de la Luz Villada de Osorio, no dependía económicamente del causante y que no vio desmejorada su vida, pues en todo momento ha sido respaldada por sus otros hijos.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones propuso las excepciones de inexistencia de la obligación; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; buena fe; prescripción; excepción innominada; compensación e imposibilidad de condena en costas.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El Juzgado de Conocimiento puso fin a la primera instancia mediante providencia proferida el 2 de marzo del año en curso, por medio de la cual declaró el derecho de la señora María de la Luz Villada de Osorio, en calidad de madre, a la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo Jhon Jaime Osorio Villada; declaró prescrito el derecho de las mesadas pensionales causadas hasta el 30 de marzo de 2016; condenó a COLPENSIONES E.I.C.E a reconocer y pagar a la demandantes la suma de \$81.771.680 como retroactivo causado desde el 1º de abril de 2016 hasta el 28 de febrero de 2023, previa deducción del porcentaje que por ley corresponde al sistema de salud, y continuar pagando mensualmente la mesada pensional en valor del salario mínimo legal mensual vigente, con la mesada adicional de junio y noviembre; absolvió a COLPENSIONES E.I.C.E de la pretensión de pago de intereses moratorios, ordenando en subsidio, pagar de forma indexada las mesadas, desde la causación de cada una hasta cuando cumpla con el pago y condenó en costas a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

Solicita se modifique la sentencia a efectos de que se reconozcan los intereses moratorios dado que COLPENSIONES E.I.C.E tuvo un retardo en el pago de las mesadas, y si hubiera hecho una investigación administrativa más a fondo, la pensión hubiera sido reconocida en fecha anterior.

COLPENSIONES E.I.C.E

Solicita la apoderada se revoque la sentencia y se absuelva a la entidad de todas las pretensiones, teniendo en cuenta que la parte actora no cumple con los requisitos para acceder a la pensión en los términos de la Ley 100 de 1993 en su versión original, pues conforme a la investigación administrativa realizada se concluyó que la demandante no dependía económicamente del causante, debiéndose tener en cuenta esta prueba.

Sostuvo que en la prueba testimonial y el interrogatorio de parte realizado a la demandante, contrario a lo manifestado por la Juez, se aduce que la demandante vivía con unos hijos que tenían algún problema mental o un estado mental que les impedía ayudarle económicamente a la demandante, sin embargo, en ningún momento se acreditó documentalmente el estado mental de esos hijos, adicionalmente, en el interrogatorio la demandante manifiesta que todos sus hijos trabajaban, algunos como emboladores y que su hija Gilma le aportaba económicamente, que además, se verificó en la prueba que la demandante no vivía solamente con Jhon Jaime Osorio, como se manifestó en los hechos de la demanda, sino que vivía con otros hijos, quienes ayudaban y aportaban en la casa.

Aunado a lo anterior, refirió que la actora era casada con el señor Martín Osorio, quien aportaba en la casa, era vendedor ambulante, no existiendo

claridad de que exista dependencia económica relativa o parcial, aunado a que la condición de la demandante no desmejoró con el fallecimiento de su hijo, pues el señor Martín Osorio y la señora Gilma también aportaban, presentándose inconsistencia entre los dichos de la demandante y el de los testigos, además la testigo María de Jesús siempre indica que “creía”, “que al parecer” y lo cierto es que no se constató ni siquiera cual era el aporte de John Jaime y si el mismo era permanente, no acreditándose entonces el requisito de dependencia económica exigida por la Ley.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de COLPENSIONES E.I.C.E, insistiendo en la revocatoria de la sentencia, reiterando para ello los argumentos expuestos al momento de sustentar el recurso de apelación.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el joven Jhon Jaime Osorio Villada, quien nació el 4 de marzo de 1967, era hijo de los señores María de la Luz Villada de Osorio y Martín Lázaro Osorio Ruiz, conforme al registro civil de nacimiento, visible a folios 14 del anexo 02 del expediente digital.
- Que el joven Jhon Jaime Osorio Villada, falleció el 3 de mayo de 1997, tal y como informa la copia del registro civil de defunción visible a folios 16, del anexo 02 del expediente digital.
- Que el causante cotizó 357 semanas en toda su vida laboral, pues así se desprende de la historia laboral emitida por COLPENSIONES E.I.C.E, militante a folios 59 a 61 del anexo 09 del expediente digital.
- Que la señora María de la Luz Villada de Osorio, solicitó a COLPENSIONES E.I.C.E el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia el 26 de abril del 2019, prestación que fue negada mediante Resolución SUB 140035 del 31 de mayo de 2019, véase documento obrante a folio 20 a 24 del anexo 03 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, absolver a COLPENSIONES E.I.C.E, de la totalidad de las pretensiones de la demanda, determinando para tal fin, si la señora MARÍA DE LA LUZ VILLADA DE OSORIO, acredita la calidad

de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia causada con ocasión del fallecimiento de su hijo, Jhon Jaime Osorio Villada, ocurrido el 3 de marzo de 1997, en caso afirmativo, si es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, la demandante María de la Luz Villada de Osorio, no acredita la dependencia económica respecto de su hijo fallecido Jhon Jaime Osorio Villada, y, por lo tanto, no es beneficiaria de la pensión de sobrevivencia. En consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

En voces de la Corte Constitucional “*El derecho a la pensión de sobrevivientes es “(...) la garantía que le asiste al grupo familiar de una persona que fallece siendo afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para reclamar la prestación que se causa precisamente con tal deceso”. De otro lado, el derecho a la sustitución pensional le asiste al grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez, para reclamar, ahora en su nombre, la prestación que recibía el causante. Debe enfatizarse en que, pese a la distinción nominal entre la pensión de sobrevivientes propiamente dicha y la sustitución pensional, la jurisprudencia constitucional se ha referido en múltiples oportunidades al propósito que comparten ambas. Al respecto, la Corte señala que “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”. Asimismo, esta prestación social “suple la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado del grupo familiar con el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de los beneficiarios de dicha prestación”* (sentencia SU 141 de 2021).

Tal y como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado (véase las sentencias CSJ SL36135-2009, SL42828 -2011, SL7358-2014, SL1503-2018, SL2843-2021, entre otras).

Por lo anterior, y toda vez que el deceso de Jhon Jaime Osorio Villada, tuvo lugar el 3 de marzo de 1997, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, así:

El Artículo 46 de la Ley 100 de 1993 dispone:

“ARTICULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte”.

A su vez el artículo 47 de dicho estatuto, define como beneficiarios de la prestación a:

“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste”.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso que concita la atención de la Sala, debe determinarse, en primer lugar, si el afiliado fallecido, dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivencia, esto es, si cuenta con el número mínimo de semanas cotizadas al momento de la muerte, teniendo en cuenta que era cotizante activo al sistema, encontrando que la historia laboral allegada al plenario reporta un número de 357 semanas cotizadas en toda la vida laboral, superior a las 26 semanas, causando la prestación, punto sobre el cual, además, no existe discusión.

Se sigue de lo anterior, entrar a determinar si la demandante, en su condición de madre del afiliado fallecido, tiene la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia, ello en relación con el requisito de dependencia económica.

Parte la Sala de la premisa jurídica, que la dependencia económica, como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C111 de 2006 y lo ha reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en innumerables fallos, no requiere ser absoluta, véase al respecto las sentencias CSJ SL400 de 2013, SL816 de 2013, SL 2800 de 2014, SL3630 de 2014, SL6690 de 2014, SL14923 de 2014, SL6390 de 2016, SL 4031 de 2022 y SL 386 de 2023, sin que ello signifique, que no sea necesario que exista una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, de manera que si bien

pueden percibir ingresos adicionales, estos deberán ser insuficientes para garantizar la independencia económica.

En sentencia SL10251 de 2017, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recordó que el aporte del causante debe ser de una entidad considerable para configurar dependencia:

“En relación con la acusación presentada en el segundo cargo orientado por la vía directa, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en punto al entendimiento que debe darse al requisito de dependencia económica, puede verificarse que la sentencia de segundo grado, admitió que no se exige que la dependencia sea total y absoluta, sino que tenga la connotación de subordinación respecto de otra persona o la necesidad de auxilio o protección de otra”

“Intelección que atiende los planteamientos que sobre este asunto ha sostenido esta Corporación, pues ha sido criterio reiterado, que la dependencia económica se establece en cada caso particular, sin que la misma sea total y absoluta, pues lo que ha de probar es que se derive de una contribución por parte del causante, que se acredite como relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento del demandante, y que pueda configurar subordinación económica que se requiere para adquirir la condición.”

La anterior postura jurídica se itera en sentencia de la misma corporación, SL1243-2019 (68336) del 27 de marzo del 2019, en la que se enfatiza que la dependencia económica no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes, pero tampoco puede entenderse que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del “buen hijo”, siempre sea indicativo de una verdadera dependencia económica:

“Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de

configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).

Es por lo anterior, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo», no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley...”

Relieva la Sala que la dependencia económica de los padres respecto de los hijos, como lo ha establecido la Corte Constitucional y la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia, debe ser auscultada en cada caso concreto, sin que existan reglas de comprobación general. Igualmente, es un concepto que está vinculado al mínimo vital cualitativo de los padres, de manera que el aporte del hijo, sea determinante para mantener el mismo, con independencia del quantum de los ingresos propios o suministrados por terceros.

Descendiendo al caso objeto de análisis, encuentra la Sala que le asiste razón a la recurrente al afirmar que no se acreditó la dependencia económica, distando esta Sala de la conclusión a la cual arribó la funcionaria de primera instancia, al considerar que no puede tenerse en cuenta la prueba de la confesión de la actora, en torno a que percibía otros ingresos, por ser contraria a la prueba testimonial.

Lo anterior, teniendo en consideración que la señora María de la Luz Villada de Osorio, al rendir interrogatorio manifestó que estuvo casada con el señor Martín Osorio, quien falleció hace 4 años, que tuvo 9 hijos, que Jhon Jaime era de los hijos menores y para la fecha en que fallece Jhon Jaime, su esposo Martín vendía limones en la minorista, lo que hacía desde que llegaron a

Medellín y los hijos más grandes embolaban y le ayudaban, que lo que ganaban sus hijos era para la casa, que su hija Gilma quien vivía en un pueblo le ayudaba económicamente, sin recordar cuanto era la ayuda, al preguntársele si con lo que su hija Gilma le aportaba le alcanzaba para sobrevivir y solventarse, indicó que claro, porque ahí estaba Martín, su esposo, manifestó igualmente que vivía con todos sus hijos para cuando murió Jhon Jaime, no obstante afirma que su hijo era quien llevaba la casa e incluso se iba para la minorista a ayudarle a Martín, que Jhon Jaime le daba la plática para mercar, que lo poquito que se ganaba se lo daba a ella y ella le daba la plática a él para que tomara fresquito y lo vestía, reiterando posteriormente, que sus otros hijos aportaban para el hogar, pues lo que pudieran conseguir iba para la casa y que el mayor aporte lo hacía Martín, su cónyuge.

De lo anterior, resulta claro que el hogar de la actora, el cual para la fecha del deceso de Jhon Jaime Osorio Villada, estaba conformado por la señora María de la Luz, el señor Martín Lázaro y sus hijos, desconociéndose exactamente cuántos de los hijos habitaban bajo el mismo techo, se sostenía de los aportes que efectuaba el señor Martín Lázaro, padre, y los hijos, especialmente la señora Gilma y el señor Jhon Jaime, desconociéndose la proporcionalidad del aporte que cada uno efectuaba.

En relación con la prueba testimonial, se destaca que se recibió declaración de las señoras María de Jesús Jaramillo Restrepo y Luz Elena Casa Hoyos, quienes manifiestan cercanía con el núcleo familiar de la actora en razón a la vecindad y los lazos de amistad creados.

La señora María de Jesús Jaramillo Restrepo indicó que la demandante vivía con su esposo don Martín y sus hijos Fortunato, Elkin, Amparo y Jhon Jaime, señalando que Fortunato y Elkin, eran personas especiales, que la demandante es ama de casa, el señor Martín se rebuscaba el sustento en la minorista, que

no sabe cuánto se ganaba en ese rebusque, pero cree que le alcanzaba para los gastos de la casa, siendo quien llevaba la obligación con Jhon Jaime, quien trabajaba en un almacén de repuesto de carros, indicando posteriormente que era Jhon Jaime quien aportaba para la casa, porque a Martín no le alcanzaba, refirió que Jhon Jaime llevaba dinerito a la casa, el mercado, porque lo veía bajando el mercado de una motico y pagaba el arriendo, reconociendo que deduce que era Jhon Jaime quien aportaba porque era el único hijo que estaba trabajando, mencionando además que no sabe cuánto aportaba don Martín y que después de la muerte de Jhon Jaime, Gilma la hermana, quien vivía en otra parte, se separó del esposo y se vino para la casa de la mamá y se quedó viendo por el hogar, indicando que se imagina que la situación económica fue más apretada y que desconoce si Gilma ayudaba económicamente a la demandante antes del fallecimiento de Jhon Jaime.

De lo dicho por la declarante, no puede la Sala extraer con certeza que en efecto fuera el señor Jhon Jaime Osorio Villada quien aportaba en mayor media al hogar, en tanto que la deponente no conoce el aporte que realizaba el señor Martín Lázaro Osorio, desconoce si la otra hija Gilma realizaba algún aporte, al igual que la ayuda que pudieran realizar los otros hijos de la demandante, pues solo refiere a que dos de ellos tienen una condición especial que les imposibilita trabajar y no da razón de los otros cuatro hijos de la pretensora. Aunado a ello, de las respuestas ofrecidas por la testigo, se infiere que la misma no tiene un conocimiento directo de lo que declara, sino que expone las cosas como las supone o considera que son así, sin que pueda pasarse por alto que realizó afirmaciones que ni siquiera fueron expuestas por la demandante, tal y como que el causante era quien pagaba el arriendo.

Por otro lado, la señora Luz Elena Casa Hoyos, manifestó que Jhon Jaime vivía con el papá Martín Osorio, la mamá, y los hermanos Elkin, Fortunato y Amparo, que Elkin tenía síndrome de Down, Fortunato tenía como locura y

que Amparo también era una persona especial, que Martín se dedicaba al rebusque en la plaza minorista vendiendo revuelto y lo que resultara, que Jhon Jaime trabajaba en un almacén de repuestos de carro, que no sabe cuánto devengaba Jhon Jaime, que se imagina que el mínimo y que no sabe si la hija Gilma ayudaba económicamente a la familia antes del fallecimiento de Jhon Jaime, porque solo la vino a conocer después del fallecimiento de este último.

Destaca la Sala, que la testigo mencionó que conoce a la demandante desde el 95 o 96, cuando llegaron a su vivir a su cuadra y teniendo en cuenta que la fecha de fallecimiento de Jhon Jaime lo fue en mayo de 1997, no resulta claro, el conocimiento que pueda tener en relación a las condiciones de vida del grupo familiar de la actora para el año 1997, además de que tampoco sabe cuál era el aporte que hacía el señor Martín, no sabe si Gilma realizaba algún aporte y tampoco menciona los restantes hijos de la demandante, limitándose a afirmar que Jhon Jaime aportaba económicamente y llevaba la carga de la casa, sin ofrecer otros detalles, ni especificar en qué consistía ese aporte económico.

Bajo el anterior contexto, del análisis de la prueba testimonial no es posible concluir que en efecto el aporte que eventualmente daba el señor Jhon Jaime a sus padres y específicamente a su madre, que es quien acude ante la jurisdicción, fuera determinante para generar una dependencia económica, pues no se logra establecer cuál era realmente la contribución del causante ni su periodicidad y si bien ha sido clara la Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia en señalar que no es necesario acreditar la cuantía del aporte del causante, teniendo en cuenta que es un requisito que no se encuentra previsto por la norma, en este caso en concreto si resulta relevante poder determinar en qué consistía el mismo o un aproximado de su valor, teniendo en cuenta las confesiones de la demandante en el sentido de que el mayor aporte lo hacía su esposo Martín, y que sus hijos Gilma, Jhon Jaime y sus otros hijos, aportaban lo que conseguían, pues como también lo ha

sostenido la jurisprudencia, para el legislador lo importante es la prueba de que el hijo proveía en un porcentaje importante, relevante y subordinante para el sostenimiento de sus padres (SL 650 de 2020, SL 529 de 2020), y ello, no quedó acreditado en el plenario, siendo que cualquier ayuda por parte de un hijo no constituye dependencia económica y así lo ha dejado sentado el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en sentencia como la SL 14539 de 2016 y la SL 4103 de 2016.

Colofón de lo anterior, concluye esta colegiatura que resulta insuficiente la prueba recaudada a fin de determinar la existencia real del aporte del hijo y el carácter subordinante del mismo, respecto a los demás ingresos del núcleo familiar de la demandante, no siendo posible establecer la dependencia económica parcial, que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Cabe recordar, también, que la pensión de sobrevivencia tiene como fin reducir las consecuencias económicas adversas que genera la muerte del afiliado o pensionado, en aras de evitar un cambio importante en las condiciones de vida del núcleo familiar y beneficiarios de la prestación, evidenciándose que, en el asunto sometido a estudio, no se acreditó ese cambio en las condiciones de vida de la actora, toda vez que las mismas se mantuvieron iguales, en tanto que, siguió contando con el ingreso de su esposo y la ayuda de sus restantes hijos, agregando, que llama la atención de la Sala, que la demandante solo se haya presentado a reclamar la pensión de sobrevivencia a COLPENSIONES E.I.C.E en el año 2019, esto es 22 años después de la muerte de su descendiente, anualidad que coincide con el año de fallecimiento del señor Martín Lázaro Osorio Ruiz, y la pérdida del apoyo económico de sus cónyuge.

Por último, debe señalarse que no desconoce la Sala que en el trámite procesal se invoca la situación de vulnerabilidad que presenta la demandante, sin

embargo, la protección que debe darse a la misma corresponde a una política pública de protección al adulto mayor, la cual no puede trasladarse a la administradora pensional, en tanto las prestaciones de la seguridad social se encuentran regladas y sujetas al cumplimiento de los requisitos previstos por el legislador, que en este caso no se cumplen.

Corolario de lo anterior se **REVOCARÁ** el fallo confutado, atendiendo a las condiciones particulares de vulnerabilidad de la actora, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, se abstendrá la Sala de imponer condena en costas a la accionante, advirtiendo que las mismas tampoco se causaron en primera instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:


1.- Se **REVOCA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el 02 de marzo de 2023, en el proceso ordinario instaurado por la señora **MARÍA DE LA LUZ VILLADA DE OSORIO** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E**, y en su lugar, se **ABSUELVE**, a **COLPENSIONES E.I.C.E**, de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra.

2.- Sin **COSTAS** en ambas instancias.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

(Sin firma por ausencia justificada)